

ENTRE NÚMEROS



De Soraya Pérez*

@PerezSoraya

Hacia la bancarrota

A partir de que el gobierno electo anunció el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, optando por reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca, así como por construir dos pistas adicionales en la base militar área de Santa Lucía, en Zumpango; las consecuencias económicas ya están a la vista de todos.

En primer lugar, se vivió la depreciación más fuerte de nuestra moneda, superando los 20 pesos por dólar, magnitud que no teníamos desde el 2016 durante los días negros tras la victoria de Trump en Estados Unidos. También vimos un desplome de la Bolsa Mexicana de Valores equivalente a más de 18,000 millones de dólares en valor de capitalización bursátil. Y lo que es irónico, uno de los argumentos a favor de la idea de Santa Lucía es que reduciría los costos de inversión; sin embargo, esta caída representó 32% más de los 13,300 millones de dólares que hubiera costado el proyecto del nuevo aeropuerto.

López Obrador señaló enérgicamente que llegó la hora de que la democracia someta a los mercados financieros. Desafortunadamente, la economía internacional no funciona así, hoy tenemos cambios en la perspectiva de nuestra calificación crediticia en las principales instituciones en la materia. Morgan Stanley redujo el grado de inversión sobre activos mexicanos argumentando que la decisión de cancelar el megaproyecto enflaquecería la presencia de inversionistas en el país. Moody's respondió a los resultados de la consulta bajando la calificación de los bonos de carbono a una perspectiva negativa, ya que el proyecto alternativo no puede asegurar la fuente de ingresos pronosticada. Y Fitch Ratings hizo lo propio, resaltando que con este tipo de decisiones, el nuevo gobierno pone en riesgo, además de las inversiones, las reformas estructurales, sobre todo la energética, que sostiene las perspectivas de crecimiento económico en México.

Además del cambio de todas las calificaciones crediticias, el banco de inversión suizo UBS advirtió que dados los resultados de la consulta, el gobierno entrante podría utilizar este tipo de ejercicios como una práctica común para la toma de decisiones. Esto podría socavar nuestra soberanía, aumentando la posibilidad de que el presidente electo utilice este mecanismo para decisiones tan relevantes como la extensión de facultades de Banxico y el uso de las reservas internacionales para saldar la deuda, hasta la extensión de su mandato por más de seis años.

Yo quisiera insistir, una vez más, en la importancia de la consulta popular, pero siempre y cuando se siga el procedimiento establecido en nuestra constitución, y que asegure total imparcialidad y universalidad de los resultados. Pero hacer una consulta ciudadana sin rigor estadístico y sobre temas técnicos, e incluso sobre asuntos fiscales — lo que está claramente prohibido en nuestra legislación— puede afectar seriamente la estabilidad política, social y económica del país.

Recién los legisladores de Morena aprobaron un dictamen en sentido negativo de la Cuenta Pública 2016, de nuevo ven un juego político en los asuntos técnicos y económicos del país. Quieren ocultar tras un dictamen que sólo es un *copy-paste* de las fichas de la auditoría, decisiones tan preocupantes como las de la cancelación del nuevo aeropuerto, el proyecto de infraestructura más importante de América Latina, y de México.

La estabilidad económica de este país se ha construido a lo largo de décadas, y hemos participado muchos: partidos políticos, expertos, analistas, medios de comunicación e inversionistas. Pero destruirla, será más rápido de lo que imaginamos, quizás la primera vez en la historia que veamos a un presidente que pudo recibir un país con crecimiento e inversiones, y ahora sí, lo recibirá en bancarrota.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!